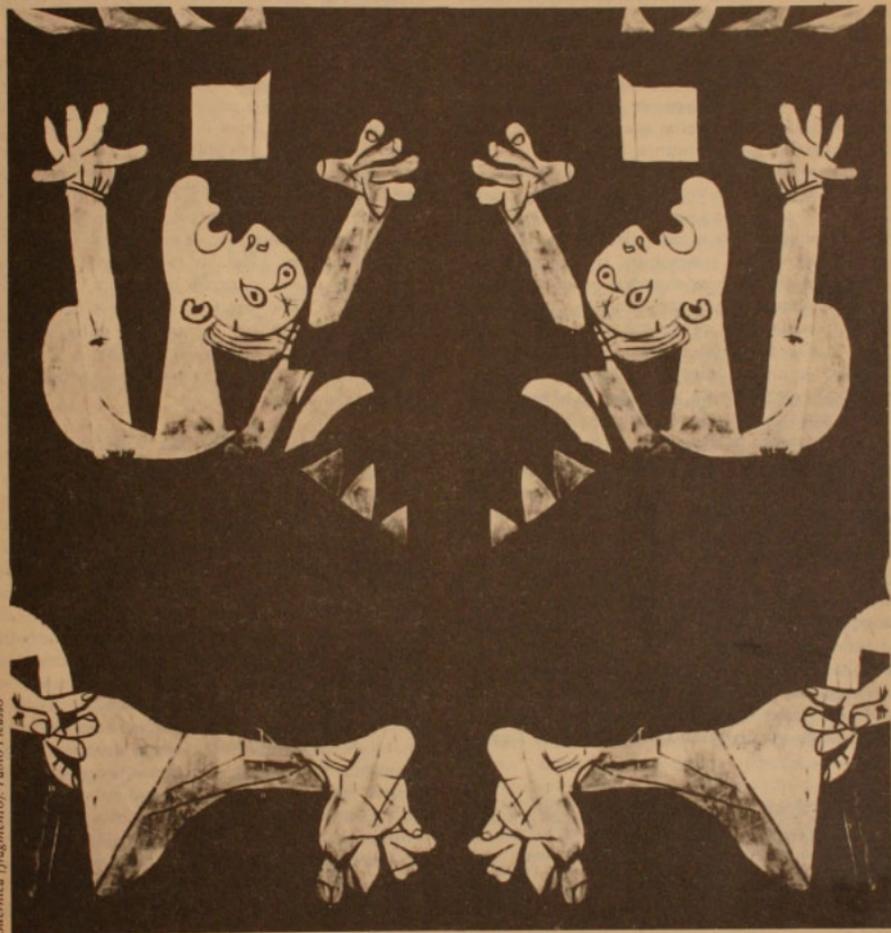


MIEDO AL ESTADO, MIEDO A LA SOCIEDAD

JAVIER MARTINEZ



MIEDO AL ESTADO, MIEDO A LA SOCIEDAD*

Javier Martínez

Sociólogo, investigador de SUR.

En este artículo pretendo formalizar dos aspectos de las "protestas" de 1983 y 1984 de la población civil contra el régimen militar: por una parte, los factores que hicieron de esas movilizaciones los primeros casos de manifestación masiva anti-gubernamental, superando un límite de miedo que es característico en este tipo de regímenes. Por otra, los factores que hicieron que esa forma de acción colectiva perdiera progresivamente vitalidad.

El "límite del miedo" tiende a presentarse habitualmente como un círculo vicioso: la supresión de la arena política; la recurrencia a formas policiales de control que se extienden más allá de la vida pública (hacia el plano de las relaciones sociales y personales, la vida privada, las convicciones); o las acciones represivas que incluyen como norma una abierta desproporción entre las conductas que se estiman punibles y el castigo que se les aplica, cuando son realizadas de modo continuado por el Estado y sobrepasan la línea de primera resistencia que ofrece la organización social anterior, dan origen a una situación de difícil retorno: a partir de ese momento, el miedo se reproduce a sí mismo, aumentando progresivamente el aislamiento de los individuos y de los grupos más activos de resistencia al "nuevo orden".

Las más de las veces, ese círculo vicioso se rompe con el concurso de acontecimientos extraordinarios, irreducibles al cálculo racional de probabilidades, o debido a una ruptura interna del grupo dominante. El caso de las "protestas" pareció mostrar otra salida, proveniente de la propia sociedad civil y de sus formas tradicionales de representación: ¿por qué fue eso posible, y por qué en un momento dado la potencia de esa vía pareció agotarse?

El argumento que pretendo desarrollar aquí es muy simple: las "protestas" tuvieron la virtud de transformar la resistencia en un *hecho no-heróico*; pero no lograron

articular una contra-disciplina social, alternativa al orden autoritario, que permitiera incrementar progresivamente el desafío al poder del Estado; en condiciones estáticas, la sociedad civil se vio tensionada entre el miedo al Estado y el miedo a sus propias tendencias destructivas. La profundidad de la división nacional en el período histórico anterior y la franca impotencia del proyecto modernizador de los militares, desequilibraron la balanza en favor de la inercia. Vistas las cosas ex-post, pareciera haber existido límites estructurales muy difíciles de sobrepasar en la transformación de las protestas en movilizaciones orgánicas o en la construcción de un consenso social democrático. Como en todas las racionalizaciones ex-post, sin embargo, queda un amplio beneficio a la duda. Con todo, el caso chileno pareciera confirmar lo que se ha señalado muchas veces: que la persistencia de las dictaduras militares no es una cuestión que atañe sólo a la relación entre civiles y militares, sino también a las relaciones entre civiles y civiles.

LAS PROTESTAS COMO FORMA DE RESISTENCIA NO-HEROICA

Durante casi toda la primera década de gobierno militar, las manifestaciones de descontento fueron escasas, realizadas principalmente por pequeños núcleos políticamente activos que encontraban, por otra parte, una receptividad muy limitada entre la población (al menos si uno se atiene a sus manifestaciones activas). Aun pasada la primera etapa de consolidación del nuevo gobierno en el poder, que incluyó una política de radical disolución y descabezamiento de las organizaciones sociales o políticas que sustentaron al gobierno de Allende —e incluso de las que, a juicio del nuevo régimen, habían sido demasiado blandas con aquel— subsistieron un conjunto de organizaciones clandestinas que llamaron continuamente a alzarse contra el nuevo régimen y sectores de la civilidad que buscaron convocar a formas abiertas de oposición o contestación política. Diez años es un período largo y, sin embargo, ni las manifestaciones ni su receptividad crecieron en forma significativa. ¿Qué puede explicar entonces que, en forma súbita, se produjeran manifestaciones tan masivas de pro-

* Este artículo es una versión sintética de la ponencia presentada por el autor a la Conferencia sobre "Cultura del Miedo en Regímenes Autoritarios" organizada por el Social Science Research Council (Buenos Aires, Junio de 1985), con el título de *Miedo al Estado, Miedo a la Sociedad*. Se reproduce aquí debido a la actualidad del tema, aunque sin modificaciones que intenten dar cuenta de los acontecimientos ocurridos desde esa fecha hasta hoy.

testa como las que tuvieron lugar a partir de mayo de 1983?

Ciertamente puede intentarse una gruesa explicación económica del fenómeno, atendiendo a la drástica contracción que la economía chilena comenzó a experimentar desde el segundo semestre de 1981, luego de la expansión tan impresionante como ficticia que se vivió en el período que va entre fines de 1976 y fines de 1980. La sucesión de estos dos bruscos ciclos (que se expresaron en extremos de crecimiento del P.G.B. de 9%, y caída violenta de -15%) podría dar base a una interpretación del fenómeno centrada en la idea de una frustración masiva de las expectativas que se habían venido formando en los años del "boom", y que habría dado origen a una rebelión del cuerpo social.

Esta interpretación puede ser adecuada en alto grado, pero apenas se refiere al escenario dentro del cual se produjeron las manifestaciones de protesta. No toda situación de frustración masiva conduce al mismo resultado y, de hecho, un ciclo recesivo de similar intensidad pero de resultados opuestos tuvo lugar durante 1974 y 1975, inmediatamente después de la fuerte expansión del poder adquisitivo de las masas asalariadas, de la participación social y política y de todos los indicadores de modernización social durante 1964 - 1973. En el período 74 - 75 se dieron dos situaciones fundamentales, ninguna de ellas de carácter económico, que lo diferencian del período 81 - 83; en primer lugar, la cercanía histórica de una profunda división política de la sociedad chilena. En segundo lugar, el miedo a la represión. La forma en que una frustración generalizada deviene en protesta o rebelión; cómo el escenario es llenado por actores y por un guión que le son congruentes, requiere de una interpretación sociopolítica antes que meramente económica. Si las insatisfacciones o frustraciones individuales se transforman en acción colectiva continuada de protesta o rebelión, es porque más allá de las condiciones estructurales se ha logrado un giro en las relaciones entre los actores que, antes que nada, puede describirse como la superación del "síndrome heroico" en relación al poder.

Entiendo por "síndrome heroico" una percepción social de la realidad según la cual el conjunto de los dominados se encuentra en una condición específica frente a un poder central y superior: la condición de ser (o estar) igualmente inermes frente al poder; en que, por tanto, la resistencia al poder no puede plantearse en términos de estrategias racional-instrumentales, sino de afirmación de un conjunto de valores éticos superiores que sólo pueden manifestarse a través de la acción expresiva de carácter

extra-ordinario; y que, dada la igual precariedad de recursos de poder, queda sujeta en su realización a la desigual distribución inter-individual del coraje. En esta situación, el grueso de la población toma la forma de público, y un individuo o pequeño grupo, la forma heroica; la forma heroica sólo puede ser seguida por actos de similar magnitud y, por ello, tiende a reforzar la diferencia entre el individuo o pequeño grupo y la masa (sea por la vía de la indiferencia, el rechazo o la sacralización).

Las "protestas" de 1983 permitieron superar el "síndrome heroico" al menos desde tres puntos de vista, que deben ser retenidos para comprender su posterior pérdida de vitalidad: los convocantes de la protesta, la magnitud de las acciones y el refuerzo colectivo.

a) LOS CONVOCANTES

La primera "Protesta Nacional", del 11 de mayo de 1983, fue convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Este hecho está muy lejos de ser indiferente, puesto que fue la confianza de la gente en la centralidad estratégica del convocante lo que determinó su éxito. Llamados a protestar, a resistir, a parar, a rebelarse, han existido tantos en estos años como días en el poder lleva el gobierno militar. Si este llamado tuvo una acogida distinta fue porque en los más diversos sectores sociales existía la percepción —refrendada por la experiencia histórica de que la minería del cobre es la actividad económica clave del país y un paro de sus actividades crea problemas económicos inmanejables que obligan a los gobiernos a la transacción.

Desde el punto de vista estrictamente económico, la Gran Minería del Cobre afecta en términos de requisitos directos e indirectos aproximadamente al 11% de los eslabonamientos del sistema productivo y distributivo nacional; en términos financieros, su importancia es todavía mucho mayor, puesto que es en último análisis el principal respaldo de todos los créditos contratados por el sector público e, indirectamente, por el sector privado en el exterior. Si se piensa que el paro político-gremial de octubre de 1972 contra el régimen de Allende —que, en palabras del ex-Presidente norteamericano Nixon, "hizo chirriar" a la economía chilena— fue llevado adelante por una combinación de sectores económicos cuya paralización afectaba al 15% de los eslabonamientos directos e indirectos del sistema, sin afectar al mismo tiempo los flujos financieros, puede tenerse una idea aproximada de la exactitud de esta percepción generalizada entre los chilenos.

La importancia de una convocatoria realizada por la Confederación de Trabajadores del Cobre no puede reducirse, sin embargo, a la sola percepción de su alta centralidad estratégica en el sistema económico: desde el punto de vista de la propia constelación de actores sociales, tal convocatoria aparecía como un giro decisivo.

Más allá de las interpretaciones ideológicas de la historia reciente de Chile, que suelen reducir al actor sindical a un solo movimiento homogéneo, políticamente radical y clasista, lo cierto es que pueden distinguirse al menos dos grandes corrientes del movimiento sindical que han seguido orientaciones de acción diferenciadas desde aproximadamente el fin de la Segunda Guerra Mundial: de una parte, un movimiento que tenía su base de implantación principalmente en las grandes empresas de la industria y la minería tradicionales, protegidas de la competencia externa por el Estado y habitualmente en manos privadas; dada la escasa importancia estratégica de este sector en la economía nacional y la propia debilidad del empresario para responder a las demandas laborales a nivel microeconómico, este movimiento sindical tendió a articularse principalmente como un actor político, combinando un discurso radicalmente clasista en relación a los empresarios con una orientación de negociación hacia la cúpula del Estado. La lucha contra los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios permitió a este sector una alianza de largo plazo con el movimiento asociativo de la burocracia pública y privada, lo que dio origen en 1952 a la Central Única de Trabajadores. Al lado de este movimiento, pero sin integrarse nunca a él sino para algunas luchas parciales, existía otro movimiento sindical de un peso aun mayor que el anterior, cuyas orientaciones de acción fueron siempre mucho más "gremialistas" que políticas: un movimiento que tenía su base de implantación en las grandes empresas estratégicas del Estado o bajo el control del capital extranjero (el cobre, la electricidad, el petróleo, los puertos, el acero) y que, dada su localización privilegiada y la fortaleza económica de sus empleadores, no requería de amplias alianzas para dar peso a sus demandas, sino que podía negociar directamente a nivel de empresa.

Un llamado desde los trabajadores del cobre tenía, pues, la peculiaridad de unir a estas dos grandes corrientes del movimiento sindical en un contexto en que el sindicalismo tradicional se encontraba francamente desgastado, tanto por la liquidación de su base de implantación (derivada del levantamiento de las protecciones a la industria tradicional y de la reducción de la burocracia pública desde 1974) como por su extremo compromiso con el

régimen político anterior, que segmentaba su capacidad de convocatoria. Al contrario, el tipo de sindicalismo representado por los trabajadores del cobre aportaba una base de implantación no afectada mayormente por la política económica de la última década, y una intacta capacidad de articulación con las organizaciones gremiales de la clase media.

Estos factores económicos y sociológicos se tradujeron, desde el mismo momento de la convocatoria a la protesta, en una primera ruptura del "síndrome heroico" que prevalecía en la resistencia anti-autoritaria anterior a 1983: ellos rompían, en efecto, la percepción de igualdad de impotencias de los individuos frente al Estado, levantando una fuerte línea de protección que otorgaba seguridad a las manifestaciones de adhesión a la protesta.

b) MAGNITUD DE LAS ACCIONES

El levantamiento de esta línea de protección, ejemplificada en la convocatoria de la primera protesta, permitió a su vez la superación del segundo rasgo característico del síndrome heroico: mientras en situación de impotencia el propio desequilibrio alimenta una exigencia ética de acción expresiva, que compele a los individuos o pequeños grupos a actuar mucho más allá de sus capacidades ordinarias, la existencia de una línea de protección les permite actuar como lo que son: individuos o pequeños grupos con capacidades ordinarias. Un peón protegido por un alfil, puede llegar al extremo de la osadía y amenazar al rey mediante el pequeño movimiento que le está permitido: un casillero hacia adelante. Un peón heroico difícilmente es seguido por otros; un peón protegido, sí. La emoción expresiva es desplazada por la racionalidad instrumental de las acciones.

Si se examinan las acciones de las que se componían las protestas de 1983 - 84, se descubrirá que precisamente no había nada heroico en lo que solicitaban los convocantes a la gente: no enviar a sus hijos al colegio; no comprar nada ni hacer trámites ese día; no utilizar la locomoción colectiva; permanecer en sus casas y hacer sonar las cacerolas a una hora determinada; a los automovilistas, hacer sonar a esa misma hora las bocinas de sus vehículos; y así en adelante.

La gente sobrepasó en alguna medida esas acciones. Pero lo interesante es hacer notar que ese sobrepasamiento siguió, también, la línea de conducta propia de los individuos y pequeños grupos con capacidades ordinarias.

Visto en su globalidad, el conjunto de las acciones de las protestas tendió a hacer avanzar las fronteras que se

para a los espacios cotidianos de los espacios públicos, propendiendo a una progresiva domesticación de estos últimos. De allí que las protestas puedan ser acertadamente analizadas desde una perspectiva territorial. A Rodríguez ha señalado, por ejemplo, que "en buena medida, las jornadas de protestas ejercidas territorialmente han constituido prácticas sociales de reconstrucción y reformulación de la vida pública. La irrupción en el espacio público desde los espacios cotidianos se ha realizado a través de series de actos por medio de los cuales se ha intentado ocupar sectores de la ciudad, partiendo desde los lugares donde los habitantes de la ciudad realizan sus actividades cotidianas: lugares de trabajo, de estudio, de residencia"¹.

Lo que muestra claramente el ensayo de Alfredo Rodríguez es que, desde el punto de vista territorial, las acciones de que se compuso la protesta fueron una infinidad de actos que se realizaron rehuendo el espacio central del tablero (propio de la acción espectacular o heroica), intentando más bien avanzar a él desde los márgenes: los espacios privados y cotidianos de cada uno. Esto producía a su vez una máxima dispersión de las fuerzas del Estado, con lo que el desequilibrio entre el individuo o pequeño grupo inerte y el poder central tendía a reducirse a una escala notablemente inferior. Aun en el sobrepasamiento de las formas pasivas de resistencia propuestas por los convocantes, la protesta resultaba así en una superación del síndrome heroico.

e) EL REFUERZO COLECTIVO

A diferencia de las conductas extraordinarias, cuyo referente puede llegar a ser algo tan metafísico como "Dios y la Historia" (aunque las más de las veces lo sea también el sublime reconocimiento de los contemporáneos), las conductas ordinarias requieren —para sobrepasar el límite del miedo— de un refuerzo proveniente de la constatación de que muchos están haciendo lo mismo o más que uno y que, por tanto, la propia conducta no es particularmente punible (o, al menos, no se destaca entre las principales conductas punibles); se requiere, por tanto, no una diferencia con respecto a la masa sino una plena confusión en ella.

El primer aspecto del refuerzo que requiere una manifestación colectiva como ésta, es la certeza de que la "línea de protección" continúa alta. El segundo, que hay

un conjunto de gente haciendo más de lo que se le pide a la mayoría. El tercero, que la mayoría está efectivamente actuando como se esperaba.

Las "protestas" de 1983 y 1984 permiten comprobar la recurrente distinción que, al efecto, se manifestaba en los días inmediatamente anteriores, el día mismo de la protesta y la noche respectiva: en los días inmediatamente anteriores, los convocantes reiteraban el llamado y destacaban la adhesión de nuevos actores o personajes que tendían a consolidar la línea de protección. En ocasiones, el airoso resultado de ciertos "test" confirmaba la fortaleza de dicha línea; por ejemplo, la dictación de fallos por los Tribunales de Justicia que, o bien inculpaban a ciertos responsables de la violencia represiva en las jornadas anteriores, o bien ordenaban la libertad por falta de méritos de convocantes a la protesta; la aceptación de pequeños márgenes de apertura por parte del régimen; la defensa de la Iglesia a quienes habían sufrido represión. La selectividad de la atención pública destacaba estos hechos en medio de muchos otros contradictorios. Durante el día mismo de protesta, la combinación del desafío al miedo y del miedo a la protesta producía los primeros resultados visibles: escasa asistencia escolar, locomoción colectiva, movimiento en la ciudad; primeros comercios cerrados. De otra parte, el "activo" social y político —estudiantes, dirigentes, militantes— iniciaba manifestaciones en diversos puntos de la ciudad (particularmente el centro), poniendo de manifiesto que no se trataba de un día común y que la protesta ya se había iniciado, incluso con actos que requerían más coraje que aquéllos a los que se había convocado. Durante la noche, el ruido de cacerolas y bocinas, la actividad del vecindario y las noticias de otros puntos de la ciudad y el país, reforzaban la percepción de mayoría.

Es claro que este conjunto de mecanismos de refuerzo requieren principalmente de una fluida red de comunicación social. En efecto, dado que la gran mayoría de las acciones se desarrollaban fuera de los espacios centrales, la efectividad del refuerzo dependía de un actualizado conocimiento de la situación global de las manifestaciones. El papel cumplido a este respecto por las radios de oposición fue sin duda crucial, y la prohibición reiterada de sus emisiones informativas fue una respuesta habitual del Gobierno.

CRECIMIENTO Y RUTINIZACIÓN DEL DESAFÍO

Si la superación del síndrome heroico es la primera condición de una superación colectiva del miedo al Estado,

¹ Alfredo Rodríguez, *Por una ciudad democrática*. Ediciones SUR, Colección Estudios Sociales, Santiago 1983.

una segunda condición es la persistencia y crecimiento del desafío a su poder. El levantamiento de una línea de protección tiene, como se dijo más arriba, el efecto de desplazar la emotividad expresiva y reemplazarla por algún grado de racionalidad instrumental; a esta, sin embargo —a diferencia de la anterior— se le exigen pruebas de la eficiencia de las acciones que genera, las cuales deben mostrar que la historia no es sólo un hoyo negro, sino, a lo más, un túnel, cuya salida se aprecia cada vez más cerca en la medida en que se sigue un cierto derrotero. El optimismo creciente en relación al futuro es un factor de tanta importancia como la línea de protección, y en la medida en que se han avanzado los primeros pasos en el desafío al poder, tiende a adquirirla cada vez más.

El desarrollo de las protestas chilenas muestra al menos dos fases en relación a este factor: una primera fase, que va desde la primera hasta la cuarta protesta, en la que el desafío al poder central pareció ir creciendo, aun cuando no existiera un crecimiento paralelo en la magnitud de las acciones de la población civil; y una segunda fase, iniciada con la quinta protesta (septiembre de 1983), en que el movimiento pareció rutinizarse, decreció la amplitud de la protesta y se acrecentó segmentadamente la magnitud de las acciones.

a) LA FASE DEL DESAFÍO CRECIENTE

Resulta curioso constatar que, entre mayo y agosto de 1983, la magnitud de las acciones realizadas por la población civil durante los días de protesta no sufrió mayores alteraciones; sin embargo, tanto los observadores internos como externos coincidían en señalar que el desafío al régimen autoritario era cada vez mayor, e incluso que el gobierno militar perdía crecientemente el control sobre la situación social y política del país. Si bien es cierto que entre la primera y segunda jornadas de protesta (mayo-junio 1983) se pudo apreciar un notable crecimiento en la amplitud del movimiento (y éste siguió creciendo en forma acelerada, aunque menos espectacular, en los dos meses posteriores), el factor decisivo en esta percepción no se encontraba principalmente entre los participantes de los actos de protesta, sino en su antagonista.

El "descontrol" del gobierno militar fue antes que nada un descontrol de sus propias respuestas. El control policial de Santiago, que había funcionado en forma relativamente eficiente durante el día de la primera jornada de protesta, fue desbordado ya durante la noche de esa misma jornada por la multiplicación de las acciones en los barrios y el

carácter más agresivo de las mismas. El temor que produjo entre sus filas tal desborde hizo que, desde el día siguiente de la protesta, mientras la mayoría opositora celebraba su recién alcanzada unidad y la apertura de un camino de oposición de grandes perspectivas, el Gobierno reaccionara con medidas demasiado drásticas, que aparentemente le dejaban con pocos recursos nuevos para enfrentar las protestas que se alocaban en los meses venideros: cierre de radioemisoras, querrelas contra los convocantes, allanamientos masivos en poblaciones populares. La percepción de que el Gobierno respondió con desproporción pudo haber alimentado nuevamente el temor, pero la cercanía de la primera gran demostración de descontento colectivo en diez años presentó frente a él una barrera de contención. A la inversa, la seguridad aportada por el descubrimiento de que se podía ser una mayoría activa, afirmaba más bien otra interpretación de la respuesta gubernamental: "*ladran, Sancho; señal de que avanzamos*".

Pero hubo incluso más: la respuesta represiva del Gobierno ya a la primera protesta, fue inefectiva y vacilante. De los allanamientos masivos a las poblaciones populares no apareció nada de importancia —como el Gobierno esperaba— en materia de armas, "*guerrilleros urbanos*" o "*activistas*" que hubieran instigado el movimiento, y la casi totalidad de los detenidos hubo de ser devuelta a sus domicilios; la reacción de los medios informativos (incluso oficialistas) fue de tal magnitud, que el Gobierno debió levantar el decreto que prohibía las emisiones informativas de las radios de oposición. La detención del líder de la CTC, en fin, era resuelta al día siguiente mediante el otorgamiento por el juez de una libertad bajo fianza. El conjunto de las medidas de respuesta apuntaban así a reforzar más bien la percepción de triunfo de la protesta que el temor a comprometerse en una nueva manifestación colectiva.

Esta línea de conducta gubernamental, de respuesta desproporcionada pero a la vez evocada, se mantuvo en los tres meses siguientes, cada uno de ellos marcado por una manifestación de protesta más amplia: después de la segunda jornada de protesta (junio) y días antes de la fecha anunciada para la tercera protesta (12 de julio), fue detenido violentamente y declarado reo el líder de la CTC. Días antes de la realización de la cuarta protesta, fueron detenidos e incomunicados los más altos dirigentes de la Democracia Cristiana, incluyó su Presidente. Durante la tercera y la cuarta protestas, se decretó el toque de queda a partir de media tarde. En la cuarta protesta (11 de agosto 1983), la capital amaneció ocupada por 18.000 efectivos militares, que patrullaban las calles en

actitud amenazante. La cantidad de detenidos y víctimas se multiplicó (particularmente en la cuarta protesta). De este modo, aun si las acciones realizadas por la población permanecieron exactamente las mismas, la pendiente represiva que inició el Gobierno creció a tal ritmo (alcanzando incluso niveles histéricos en agosto), que se pudo mantener con éxito la percepción de que el desafío al poder estatal era cada vez mayor.

Tal percepción estuvo alimentada a su vez por el éxito en la consecución de ciertas medidas de apertura política (se multiplicaron las autorizaciones de regreso al país a exiliados, se elevó la censura sobre los libros, se obtuvo espacio para la aparición de nuevos medios de prensa opositores) y en la defensa de la línea de protección (los tribunales decretaron la libertad incondicional de los dirigentes DC, señalando que llamar a protestas pacíficas no constituía delito;² quedaron también en libertad dirigentes de la Coordinadora Nacional Sindical que habían sido detenidos, y días más tarde, el Presidente de la CTC, Rodolfo Seguel). Este conjunto de hechos contribuyó a reafirmar que las medidas de respuesta del Gobierno eran desesperadas, no seguían un curso unívoco y resultaban ineficientes; como resultado, tendió a reforzarse la naciente confianza en que el camino elegido conducía a buen destino, y el límite del miedo se relajó.

Junto a las respuestas del Gobierno, un segundo factor que tendió a alejar el miedo, reforzando la percepción de avance, fue el creciente engrosamiento de la línea de protección. La primera protesta (mayo 1983) fue convocada, como ya se dijo, por la Confederación de Trabajadores del Cobre. La segunda protesta (junio de 1983), fue convocada por el entonces naciente Comando Nacional de Trabajadores, que agrupaba, junto a la CTC, a las restantes cúpulas sindicales de la "tradición gremialista" (la Unión Democrática de Trabajadores y la Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPECH), y al sindicalismo heredero de la CUT y de la tradición obrera radical (la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT). La convocatoria fue apoyada también por organismos que reúnen a antiguos dirigentes políticos y gremiales que estuvieron en la primera línea de la lucha contra el gobierno de Allende, como el "Proyecto de Desarrollo Nacional" (PRODEN), Colegios Profesionales y el Consejo Superior del Transporte Terrestre, y recibió, incluso, la adhesión de un ex-integrante de la

Junta Militar de Gobierno (el General de Aviación Gustavo Leigh). Diversos gremios empresariales, por otra parte, aunque no adhieron explícitamente a la protesta, acrecentaron sus reclamos contra la política económica del régimen y dejaron ver sus simpatías por los movimientos opositores. La tercera jornada de protesta (12 de julio de 1983), que se realizó con el líder de la CTC en la cárcel, introdujo una posta de la convocatoria desde los organismos corporativos (sindicales y gremiales) a los partidos políticos: el recientemente formado "Manifiesto Democrático" (antecesor de la Alianza Democrática), fue el encargado de formular el llamado, al cual adhirieron las organizaciones convocantes a las jornadas anteriores.

Hacia junio de 1983, por tanto, se había conformado ya en el país una nueva mayoría socio-política que, después de diez años, superaba por primera vez las líneas divisorias que, desde el gobierno de la Unidad Popular, separaban al centro de la izquierda, al sindicalismo de las grandes empresas modernas del de base tradicional, a éste de los gremios de pequeños empresarios. La percepción de que se abría un nuevo alineamiento dejaba por fin atrás el trauma de la polarización de comienzos de los sesenta, que había sido la boca de entrada del túnel. Tal vez fue éste el momento en que el miedo tuvo menor significación como factor en las conductas de la población civil, debido a la clara impotencia del control autoritario y al alejamiento del fantasma de la ingobernabilidad; y eso es lo que explica que las manifestaciones del 12 de julio y el 11 y 12 de agosto hayan alcanzado el punto más alto de la movilización anti-autoritaria.

b) RUTINIZACIÓN Y DESENCANTO

Pero las dos dimensiones que se conjugaron para producir una trasposición del límite del miedo (superación del síndrome heroico, percepción de avance), dependían de factores que fueron sufriendo modificaciones a lo largo de estos cuatro primeros meses de movilización anti-autoritaria, y los efectos de esas modificaciones se harían sentir en el momento de viraje que planteaba el "peak" de agosto. Alcanzado el punto de máxima presión, los actores políticos y sociales se veían en la necesidad de mover otra pieza que concretara el jaque al poder y abriera el camino a la democratización. Era el momento de la táctica y del cálculo, superados ya los factores psico-sociales que impedían su puesta en operación.

El factor material de fuerza orgánica que levantó la línea de protección frente al miedo, fue la amenaza de paro de la Gran Minería del Cobre. El llamado de la ETC. en

² Como se recordará, este fallo motivó posteriormente la dictación de una ley por parte de la Junta Militar, que tipifica como delito la convocatoria a protestas.

abril de 1983, había sido inicialmente a un paro nacional de trabajadores y no a una protesta; ésta fue decidida sólo dos días antes de la fecha prevista para la realización del paro, debido a las dificultades que otras centrales sindicales encontraron para movilizar a sus bases en torno a un objetivo máximo, como la paralización de labores. Con todo, la figura de la huelga nacional estuvo inscrita en las dos primeras protestas como probable paso posterior y, por tanto, se mantuvo presente en las expectativas de la mayoría que adhirió a las movilizaciones, dando a éstas el carácter de una prueba de fuerza con vistas a un posible reposición del llamado original. Por otra parte, el paso de la figura del "paro" a la de la "protesta" había permitido empalmar la movilización del más poderoso segmento del sindicalismo con la de los dos conjuntos de categorías sociales más extendidos del país: las clases medias, y los marginales y excluidos.

El 26 de mayo de 1983 fue detenido el Presidente de la CTC, Rodolfo Seguel, por requerimiento del Gobierno. Cumpliendo un acuerdo previo de ir a la paralización si se tomaban represalias contra sus dirigentes, la Confederación se reunió para estudiar la concreción de la medida. Pero el dirigente fue rápidamente liberado bajo fianza por los Tribunales, y el llamado no se concretó. El 15 de junio el dirigente volvió a ser apresado con violencia, y esta vez la Confederación respondió con un inmediato llamado a la paralización de sus bases, que comenzó a concretarse desde el día siguiente. A diferencia de las protestas, el llamado estuvo dirigido sólo a los trabajadores del cobre, y la CTC enfrentó así un afortunado test de fuerza.

El paro alcanzó amplia acogida en los trabajadores de producción de tres de cinco zonales, pero encontró obstáculos en las dos restantes y entre los empleados administrativos. La empresa estatal CODELCO decretó el inmediato despido de 1.800 trabajadores y convocó a quienes estuvieran interesados a presentarse para llenar las vacantes; largas filas de desempleados atendieron al llamado, lo que inclinó contra el paro a las zonales que aún no lo habían votado. Siete días después del llamado de la CTC, cuando éste ya había sido quebrado por la empresa, los transportistas llamaron a una paralización a los propietarios de camiones, la que se cumplió entre el 23 y 24 de junio, sin trascender mayormente a la opinión pública debido a la censura informativa. La posibilidad de agregar esfuerzos entre ambos movimientos ya no existía y los transportistas levantaron el paro el 25 de junio, consiguiendo una aceptable negociación de sus reivindicaciones sectoriales con el Gobierno.

A partir de ese momento, dentro de la CTC empezó a

tomar fuerza nuevamente la tendencia entrópica —que en el pasado la mantuvo alejada del resto del movimiento sindical—, mientras otro tanto sucedía con los gremios del transporte terrestre. La posta de los partidos políticos en la convocatoria a la protesta de junio restableció la potencia del movimiento nacional por la democratización y mantuvo intacta la línea de protección al miedo de la población; la principal fuerza material del movimiento, sin embargo, había sido mellada.

La "fuerza" de los partidos reside en su amplia capacidad de convocatoria nacional, pero ella es mucho más simbólica que material; algo similar ocurre con la mayor parte de las centrales sindicales distintas de la CTC. El carácter "inorgánico" de la estructura del empleo conspira contra la capacidad de los actores para movilizar disciplinadamente fuerzas en el momento de la táctica: en 1971, la proporción de asalariados en la población activa era 53%; en 1982, 38%; los "excluidos" del empleo formal constituían el 14% de la P.E.A. en 1971, mientras en 1982 se habían elevado a 36%. Entre los jóvenes, principal base de movilización de las protestas, la exclusión superó el 70%. Entre los gremios de clase media, la resta de las organizaciones de transportistas (anunciada ya para la protesta de agosto) dejó a profesionales y comerciantes aislados de un aliado fundamental.

Desde el punto de vista de las opciones tácticas que se abrían a los principales actores del mundo político, sindical y gremial, en consecuencia, la cima de agosto pudo ser sucedida por la incorporación del movimiento a cauces semi-institucionales, por la "rutinización" de la protesta (esto es, por la continuación de las movilizaciones sin perspectiva de avance en el desafío al poder) o por la apuesta a un inorgánico movimiento insurreccional de las masas urbanas. A partir de septiembre de 1983, la amplitud de las protestas decreció sistemáticamente, hasta el inicio de nuevos y breves ciclos en marzo-abril y septiembre-octubre de 1984. Se habían logrado avances importantes y el miedo al Estado no reaparecía; en cambio, éste era reemplazado por la desesperanza.

LAS TENDENCIAS DISREGGADORAS Y EL MIEDO A LA SOCIEDAD

El "relineamiento" de junio de 1983 tuvo una vida breve. De hecho, las condiciones para su extinción venían preparándose desde el momento mismo de su nacimiento. Durante la primera protesta, de mayo, se había ya podido observar que el carácter y la magnitud de las movilizaciones difería grandemente entre el día y la noche, y en ésta,

entre uno y otro sector social de la ciudad. Entre la segunda y cuarta protesta tendió a manifestarse mucho más nitidamente una creciente *segmentación social* de las acciones, con la irrupción de formas de violencia anómica principalmente en los barrios populares. En éstos, el enfrentamiento con la policía adquirió dimensiones apreciables en violencia y era acompañado por conductas delictivas —de impreciso origen— al interior de las zonas “*liberadas*” por los pobladores. El límite entre la protesta política y la conducta delictiva era muchas veces difícil de precisar, particularmente entre los jóvenes, e incluso resultaría más adecuado decir que ambas eran aspectos de una misma orientación de rechazo radical a un orden social que los excluye y oprime. El espacio de libertad que proveían las protestas permitió la liberación de un conjunto muy amplio de energías y frustraciones, difícilmente disciplinable por una mera lógica de acumulación de fuerzas políticas.

Por otra parte, fue cada vez más nítida también una creciente *segmentación social* de la represión, que tendió a concretarse en forma brutal en los barrios populares, mientras destinaba menos medios y efectivos a las zonas donde habita la población de ingresos medios y altos. Si se busca describir acertadamente esta espiral de violencia, es probable incluso que el orden de los factores deba exponerse del modo inverso al del sentido común: es debido a la violencia de la acción policíaca en los barrios populares que se genera una contestación fuertemente agresiva de parte de masas de jóvenes que viven en condiciones de aguda desintegración y anomia. Como quiera que sea, este factor tendió a debilitar tanto la identidad común del movimiento de protesta como las solidaridades interclasistas trabajosamente tejidas entre la población civil por el movimiento democrático.

A ello debe sumarse también un “*efecto paradójico*” del levantamiento de la “*línea de protección*”. Esta, en efecto, estaba constituida por actores relativamente centrales en el sistema político, social y económico. La centralidad de los actores a menudo es un factor que va ligado a la cercanía respecto a las posiciones no sólo de poder, sino también de privilegio y “*honor*” social y, en consecuencia, junto con ser factores de confianza son al mismo tiempo objetos de fuerte resentimiento. En un país políticamente tan polarizado como Chile, no debe perderse de vista tampoco que la gran mayoría de los convocantes y componentes de la “*línea de protección*” formaron parte de los núcleos más militantes de la lucha contra la Unidad Popular y el Presidente Allende, cuya vigencia simbólica continúa intacta en los medios populares,

pese al intento de aplastamiento sistemático de que ha sido objeto durante los últimos once años. El “*efecto paradójico*” consiste, pues, en que el levantamiento de la “*línea de protección*” también activa el reclamo de identidad diferenciada de los sectores más larga y duramente sometidos y humillados; si se tiene presente que incluso los símbolos tras los cuales era convocada la protesta (los “*cacerolazos*” y “*bocinazos*”) provenían del anti-allendismo, y el grado notablemente mayor de exposición a la represión a que eran sometidas las poblaciones, puede comprenderse la profundidad que alcanzó este reclamo por identidad y autonomía.

A la inversa, la creciente violencia en las poblaciones, el recurso cada vez más intensivo a la simbología allendista de parte de sus manifestantes, y el abierto recelo que en ellas se mantiene hacia los líderes y expresiones políticas históricas de los grupos medios, reactualizó el terror de éstos hacia la polarización y la dictadura de las masas, contra las que se alzaron hace una década; la creciente *segmentación social* de las protestas se transforma, así, en el mecanismo a través del cual el miedo al Estado vuelve a una de sus fuentes originarias: el miedo de la sociedad civil a sus propias tendencias auto-destructivas.

La tragedia del movimiento chileno de “*protestas*” tendió a consumarse en agosto de 1983, cuando su expresión política, en lugar de intentar el re-encauzamiento de esta tendencia disgregadora de la *segmentación social* tras el “*relineamiento*” político-social de junio, buscó más bien representarla en la arena política por medio de una división.

El 7 de agosto de 1983, cuatro días antes de la más alta manifestación de desafío al régimen autoritario, se constituyó formalmente la “*Alianza Democrática*”, compuesta por los partidos firmantes del Manifiesto Democrático, y su primer acto fue el respaldo al llamado formulado por diversos sectores a la protesta de los días 11 y 12 de agosto. El 25 de agosto, la Alianza inició una serie de reuniones de “*diálogo*” con el Gobierno, representado por su nuevo Ministro del Interior. El 30 de agosto se constituyó formalmente el Movimiento Democrático Popular, manifestando —como su primera expresión pública— un categórico rechazo al diálogo con el Gobierno, propiciado por la Alianza Democrática. A partir de entonces, se diferencian explícitamente una orientación de oposición semi-institucional (diálogo, concentraciones y marchas autorizadas, contiendas judiciales, adquisición de influencia y control sobre organizaciones sociales) y una semi-insurreccional (formación de milicias, atentados, “*paros comunales*”), entre las cuales el único punto de

contacto es la reiteración esporádica de protestas rutinizadas.

No es posible, porque estamos demasiado encima de los acontecimientos, prever si el "*miedo a la sociedad*" se traducirá nuevamente en el replanteo de la demanda autoritaria de los grupos medios; puede hipotetizarse que ello es improbable, debido al cansancio de once años de dictadura y al propio compromiso de ésta en un proceso de ascenso a los extremos frente a la estrategia semi-insurreccional. El "*miedo al Estado*", por otra parte, parece superado aun en medio de un repliegue general enmarcado

por el Estado de Sitio. Podría pensarse más bien que, luego de las protestas civiles de 1983 - 1984, la sociedad chilena ha entrado a una nueva etapa marcada por dos caracteres negativos: la desesperanza y la desintegración. Y ese parece un suelo fértil para que perviva la excrecencia autoritaria*.

* Estas apreciaciones fueron escritas antes de la firma del "*Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia*", de la conformación de la Asamblea de la Cívica y del Paro Nacional del 2 y 3 de Junio de 1986.

